



164-2022-DFIS/DIGESA/SA

Resolución Directoral

01 abril

2022

Lima, de..... del.....

VISTO el Expediente N° 52865-2018-PAS, correspondiente al Administrado **RODRÍGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO**, identificado con RUC N° 10271510352, ubicado en Calle Las Palmeras s/n, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de la Libertad, sobre la prescripción de la potestad sancionadora, y el Informe N°1258-2022/AI/DFIS/DIGESA de fecha 16 de marzo de 2022 de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria;

CONSIDERANDOS:

Que, con fecha 09 de diciembre del 2016 y 23 de noviembre del 2017, personal inspector de la Gerencia Regional de Salud de la Región Libertad, se apersonó al establecimiento de la empresa **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO** (en adelante el administrado) identificado con Registro Único de Contribuyente - RUC N° 10271510352, ubicado en calle Las Palmeras s/n Distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de la Libertad, con la finalidad de verificar las condiciones higiénicas sanitaria y el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en la fabricación de las líneas de : **PROCESAMIENTO DE FRUTAS** (néctares y mermeladas) y **LICORES** (vinos).

Que, con fecha 03 de febrero del 2017, la Gerencia Regional de Salud de la Región la Libertad, emitió la Resolución Gerencial Regional N° 0131-2017-GRLL-GGR/GRSS, en la cual resuelve imponer la medida de seguridad de suspensión temporal del ejercicio de actividades de producción y comercio de alimentos y bebidas, la misma que fue comunicada al administrado mediante Oficio N° 3064-2017-GR-LLGCR-GS-SGP GT-UTFPSAYO, del 01 de diciembre del 2017.

Que, mediante Oficios N° 1403-2017-GR-LL-GGR/GRSS-SGRS-UFRESA-AHA (Expediente N° 14009-2017-DRS) y 822-2018-GR-LL-GGR-GS-SGP GT-UTFSSAYO (Expediente N° 8894-2018-DRS), del 15 de marzo de 2017 y del 21 de febrero de 2018, respectivamente, la Gerencia Regional de Salud de la Región La Libertad, traslado a la Dirección General de la Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (en adelante, DIGESA), las actas de las vigilancia sanitaria efectuadas los días 09 de diciembre 2016 y 23 de noviembre 2017 y el Informe N° 119-2017-GR-LL-GGR/GRSS-SGP GT-UTFPSAYO-ADIA, del 27 de noviembre de 2017, en donde ratifican la medida de seguridad **SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO DE PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**.

Que, con fecha 19 de abril de 2018, la Dirección de Control y Vigilancia (en adelante DCOVI), remitió a la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante DFIS), el Expediente N° 8994-2018-



DRS, adjuntando el Memorando N° 194-2018-DCOVI/DIGESA, con la finalidad de continuar con el trámite respectivo.

Que, con fecha 16 de mayo de 2019, mediante Auto N° 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 1354-2019/AI/DFIS/DIGESA, la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, **DFIS**), decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador (en lo sucesivo, **PAS**) contra el administrado, por la presunta comisión de infracción administrativa tipificada en el literal a), b), c), d), e), f) y m) del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, el cual fue debidamente notificado al referido con fecha **10 de junio de 2019**.

Que, con fecha 17 de junio de 2019, mediante escrito asignado con Expediente No. 52865-2018-PAS-001, la administrada presenta su descargo al Auto No. 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA en los términos que contiene dicho documento.

Que, mediante Oficio No. 735-2019/DFIS/DIGESA, de fecha 25 de junio de 2019, la Autoridad Instructora de la DFIS solicita a la administrada se sirva remitir medios probatorios documentarios relacionados a las mejoras mostradas en su descargo, concediéndole un plazo de cinco días hábiles a fin que presente la requerida documentación.

Que, con fecha 26 de febrero de 2020, mediante Resolución Directoral N° 070-20/DFIS/DIGESA, sustentado en el Informe No. 240-2020/AI/DFIS/DIGESA, se dispone la ampliación por 3 meses adicionales del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO iniciado mediante Auto No. 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA.



Que, fecha 08 de febrero del 2022, mediante Informe N° 0391-2022/DFIS/DIGESA, el Área de Instrucción reporta a la Dirección de Fiscalización y Sanción, el hallazgo de expedientes, resultado del sinceramiento realizado en reunión de coordinación con el nuevo Jefe de Equipo Abog. Edwin Bellido Salazar, encontrando el Exp. 52865-2018-PAS perteneciente al administrado RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO.

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE SALUD



Que, el artículo 128 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala «la Autoridad de Salud está facultada a practicar inspecciones en cualquier bien mueble e inmueble, tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, así como de aplicar medidas de seguridad y sanciones»;

Que, el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de Alimentos, establece: «El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria es la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas».

Que, el numeral 1.2, del artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, textualmente manifiesta: «El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional y tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud. Asimismo, el literal d), del numeral 2.1, del artículo 2 del mismo dispositivo legal, señala que el Ministerio de Salud es competente en materia de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria». Además, el literal d), del numeral. 3.2, del artículo 3 del Reglamento señala como una función específica del Ministerio de Salud la de proponer la regulación de infracciones y las sanciones por la transgresión o incumplimiento de las normas sanitarias;



Resolución Directoral

01 abril

2022

Lima, de..... del.....

Que, conforme lo establece el artículo 101 del Reglamento, y sus modificatorias: "La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, es el órgano encargado a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro"

Que, según, el artículo 78 del Registro de Organización y Funciones (en adelante: ROF), del Ministerio de Salud; la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública y constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. En ese sentido, es el responsable en el aspecto técnico, normativo, de vigilancia y fiscalización en materia de salud ambiental que comprende, entre otras cosas, los alimentos y bebidas destinados al consumo humano. Asimismo, el artículo 80 del ROF señala que, para el cumplimiento de las funciones encomendadas, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria cuenta con la siguiente estructura: i) Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, ii) Dirección de Control y Vigilancia, y iii) Dirección de Fiscalización y Sanción;

Que, el literal c), del artículo 83 del ROF del Ministerio de Salud establece como función de la Dirección de Fiscalización y Sanción la de fiscalizar en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria a las instituciones privadas de nivel nacional, regional, local, y a las personas naturales que realizan actividades que tienen impacto directo o indirecto en la salud, estableciendo medidas correctivas, medidas de seguridad, medidas cautelares y sanciones. En ese sentido, la Dirección de Fiscalización y Sanción es competente para conducir las fases de instrucción y sanción del procedimiento administrativo sancionador, conforme lo establece el literal g) del artículo 83 del Reglamento, concordante con el numeral 2) del artículo 248 del TUO de la LPAG¹;

DE LA PRESCRIPCIÓN Y DE LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO

Que, al respecto, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala sobre la prescripción administrativa, «La consecuencia de la prescripción es tornar incompetente en razón del tiempo al

¹ Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.(...)

órgano sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador»². Esta definición es muy importante, porque no es que la entidad mantenga la competencia y tenga la facultad de ejercer o no la potestad punitiva, sino que la entidad deja de ser competente para sancionar en un determinado caso concreto

Que, en igual sentido, Vergaray y Gómez señalan que «La prescripción en materia administrativa consiste en la extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo, lo que acarrea indefectiblemente la pérdida del ius puniendi del Estado y elimina con ello la posibilidad, de que la autoridad administrativa pueda establecer la existencia de una conducta infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable. Los motivos lógicos que sirven de fundamento al instituto de la prescripción administrativa no son diversos de la prescripción en general. Por tanto, suelen converger en la motivación de este artículo razones de seguridad jurídica, representadas por la necesidad, de que no se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes de posible sanción; así como razones de oportunidad, pues se afirma que cuando pasa cierto tiempo se carece de razón para el castigo, porque en buena medida, al modificar el tiempo las circunstancias concurrentes, la adecuación entre el hecho y la sanción principal desaparece»³;

Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha ocupado de la definición de la prescripción en los siguientes términos:

«La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma». «Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo»⁴.

Que, en concordancia el artículo 252° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante: TUO de la LPAG), establece:

«Artículo 252.- Prescripción

252.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

252.2. El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes».

El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos

² MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Editorial Gaceta Jurídica. Octava Edición. Lima 2009. Pág. 733.

³ VERGARAY Verónica y Hugo GOMEZ. "La Potestad Sancionadora y los principios del Procedimiento Sancionador" en "Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General" Editorial UPC. Lima 2009 Pág. 435-436.

⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de abril de 2005, recaída en el Expediente N° 1805-2005-HC/TC, Fundamento Jurídico 6.



164-2022-DFIS/DIGESA/SA

Resolución Directoral

01 abril

2022

Lima, de..... del.....

constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 254, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia». [el énfasis es nuestro]

RESPECTO A LA ALEGACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN

Que, la reforma introducida con el Decreto Legislativo N° 1272 ha considerado que la prescripción puede plantearla el administrado beneficiado por vía de defensa cuando la autoridad pretendiera la imposición de una sanción, pero también que la autoridad lo puede declarar de oficio.

Que, en el primer caso, la prescripción ganada se alega por el interesado y corresponde a la Administración Pública resolverla sin abrir prueba, sin formar incidente o pedir otro acto de instrucción que la mera constatación de los plazos vencidos. Producida tal circunstancia, la autoridad igualmente sin más trámite, debe pronunciarse de modo estimatorio o desestimatorio; en caso de ser favorable a la alegación del administrado deberá disponer el inicio de las acciones de responsabilidad administrativa.

Que, en el segundo caso, se entiende que como esta prescripción es de orden público, impide el ejercicio válido de la potestad administrativa sancionadora y como tal es posible declararse de oficio, con lo cual se evita que la entidad prosiga prolongando procedimientos, simplemente porque el administrado no es ubicado o inadvertidamente no plantea la prescripción. No se trata de un favorecimiento indebido al administrado, sino simplemente de cumplimiento de plazos fatales que son de orden público.

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD PARA DETERMINAR INFRACCIONES CONTRA LA ADMINISTRADA

Que, con fecha del 23 de noviembre de 2017, personal de la GERESA-La Libertad, efectuó la vigilancia sanitaria al establecimiento de fabricación de la administrada **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO**, identificada con **RUC N° 10271510352**, ubicada en Calle Las Palmeras s/n, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad, a fin de verificar las condiciones higiénico sanitarias del establecimiento y el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, levantándose para ello el "Acta Ficha N° 6 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos procesadores de alimentos varios y bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo 007-98-SA, de conformidad a lo establecido por la normatividad vigente

RESPECTO DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Que, previo a analizar la actuación de la administración, es importante señalar alguna de las dificultades que se presentan en el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionadores en la DFIS de la DIGESA, que hace que las actuaciones sean en algunos casos un poco lato o extensos, entre ellos: i) elaborar las notificaciones; (ii) esperar el plazo correspondiente por ley para que los administrados presenten sus descargos; (iii) valorar las pruebas; (iv) analizar los expedientes según su complejidad; (v) hacer seguimientos de cada uno de ellos; (vi) la abundante carga de procedimientos administrativos que maneja el personal a cargo de los mismos; (vi) las limitaciones logísticas; entre otras labores que deben realizarse.

Que, con fecha 16 de mayo de 2019, mediante Auto N° 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 1354-2019/AI/DFIS/DIGESA, suscrito por el Blg. Rafael Fujita Vera, y el abogado Juan Antonio Baldovino Bernal, la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción, a cargo del abogado Francisco Segundo Portilla Chu, decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la administrada, por la presunta comisión de infracción administrativa tipificada en el literal a), b), c), d), e), f) y m) del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, el cual fue debidamente notificado a la administrada el día 10 de junio de 2019, concediéndole el plazo de cinco (05) días hábiles para que presente sus descargos conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 255 del TUO de la LPAG

Que, cabe precisar que el domicilio al cual fue notificado el Auto N° 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, corresponde al mismo domicilio al que figura en los Registros Sanitarios otorgados a favor del administrado, el cual se encuentra ubicado en calle las Palmeras s/n distrito de Cascas, provincia de Gran Chinú, departamento de la Libertad.

Que, con fecha 17 de junio de 2019, mediante Carta s/n el administrado presentó sus descargos contra el Auto N° 191-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO

Que, conforme a lo expuesto y, estando a que el plazo de prescripción se computa desde el día en que se hubiera cometido la infracción o esta es identificada, se tendrá en cuenta el "Acta Ficha N° 6 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos procesadores de alimentos varios y bebidas", del **23 de noviembre de 2017**, fecha en la que se realizó la última vigilancia a la Administrada **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO**, identificada con **RUC N° 10271510352**, ubicada en Calle Las Palmeras s/n, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad, con el fin de verificar las condiciones higiénico sanitarias del establecimiento procesador de alimentos de consumo humano directo, donde se habría evidenciado incumplimientos a la normativa por parte de la referida.





Resolución Directoral

01 abril

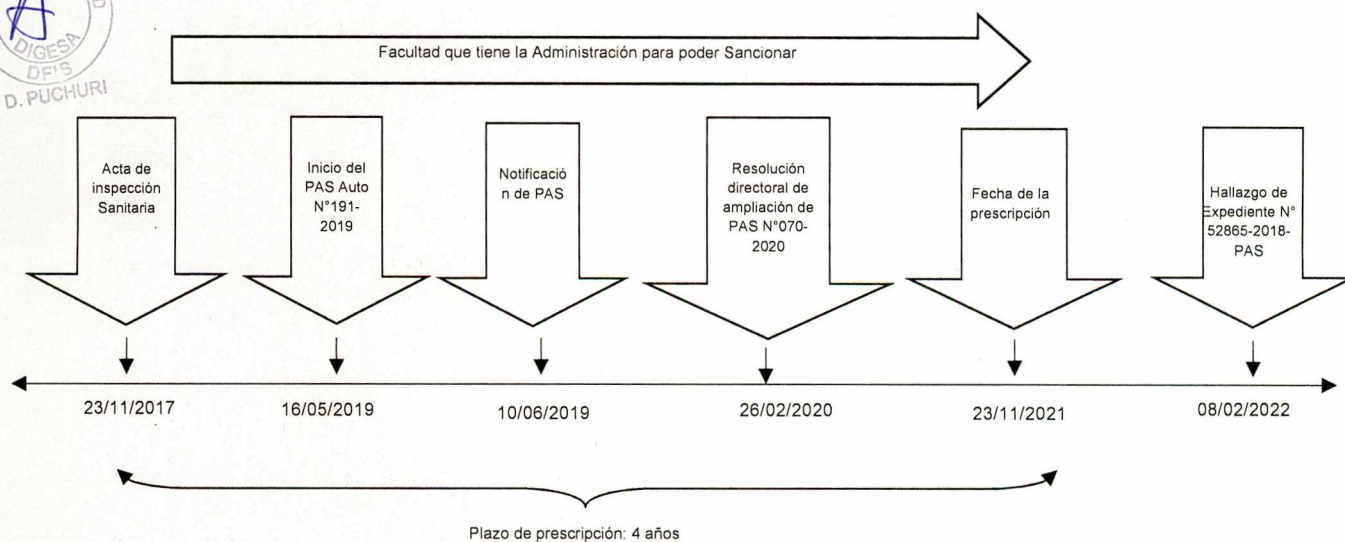
2022

Lima, de del



APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO

Que, en virtud a lo expuesto, resulta importante verificar si en el presente caso la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas ha prescrito, tomando como fecha de inicio de cómputo para determinar la prescripción el día **23 de noviembre de 2017**, de acuerdo al siguiente detalle:



Que, Conforme se aprecia del "Acta Ficha N° 6 – "Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos procesadores de alimentos varios y bebidas", personal de la GERESA-La Libertad, efectuó la inspección sanitaria con fecha **23 de noviembre de 2017**, fecha en la que empieza a computarse el plazo prescriptivo de cuatro años (04) que tiene la administración para resolver la causa, donde se verifica que a la fecha ha excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento respecto al plazo prescriptivo (**23 de noviembre de 2021**).

Que, cabe anotar que, mediante el Informe N° 0391-2022//DFIS/DIGESA de fecha 08 de febrero de 2022, la Coordinadora del Área de Instrucción Blg. Deysy Puchuri Luna reporta a la Dirección de Fiscalización y Sanción el hallazgo de expedientes, resultado del sinceramiento realizado en reunión de coordinación con el nuevo jefe de equipo Abog. Edwin Bellido Salazar; en dicho hallazgo se evidencio que el **Exp. 52865-2018-PAS** perteneciente a la administrada **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO** se encontraba en un módulo que no estaba asignado a ningún trabajador luego de iniciado la pandemia por COVID-19, razón por la cual no se dio su debido trámite.

Que, luego de realizar la búsqueda en el sistema de trámite documentario de la DIGESA, se evidencia que con fecha 04 de setiembre de 2020, el especialista encargado para dar trámite al expediente N°52865-2018 PAS fue la abogada Cynthia Elizabeth Amorín García.

Que, ese sentido, a la fecha esta Dirección no cuenta con la facultad para poder sancionar en vía administrativa a la administrada por las posibles infracciones que haya cometido, por lo que, en aplicación al numeral 252.3 del artículo 252° del TUO de la LPAG, que establece que cuando se advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones, la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el Procedimiento, en ese sentido, **corresponde declarar la prescripción y archivar el presente PAS.**

DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Que, sobre el particular, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, en caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia;

Que, en este sentido, deberá entenderse que la responsabilidad administrativa, la cual radica en las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones, las cuales deben producirse dentro de las funciones asignadas al empleado del Estado o empleado público⁵; es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, encontrándose vigente o extinguido su vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control.

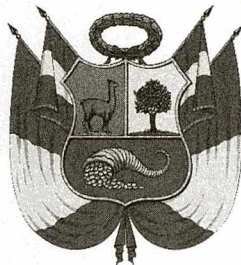
Que, se debe precisar, que desde la fecha de emitido el último acto administrativo por parte de la administración ha sido la Resolución Directoral N° 070-2020/DFIS/DIGESA/SA, de fecha 26 de febrero de 2020, y no existiendo acto posterior, que pueda determinar el incumplimiento de las infracciones tipificadas en el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, respecto a la vigilancia efectuada con **fecha 23 de noviembre de 2017**, seguido contra la Administrada **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO.**, identificada con **RUC N° 10271510352**, tramitado bajo el Expediente **N°52865-2018-PAS**.

Que, atendiendo al caso objeto de materia y a la facultad contenida en el precitado apartado legal, es de advertir la potestad con la cual la autoridad administrativa de dar inicio a las acciones correspondientes contra aquellos servidores públicos participantes del presente procedimiento administrativo sancionador conforme a la información obrante en actuados del expediente administrativo; a fin de verificar su responsabilidad administrativa en caso de negligencia durante el desarrollo de sus funciones, las cuales conllevaron a la caducidad del procedimiento; sin desmedro

⁵ Todo aquel que independiente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con algunas de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones con tales entidades, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica; y en concordancia con lo mencionado en la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, ser todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que preste sus servicios ni el régimen laboral o de contratación al que se encuentren sujetos.

REPÚBLICA DEL PERÚ

164-2022-DFIS/DIGESA/SA



Resolución Directoral

01 abril

2022

Lima, de..... del.....

de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional y de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del procedimiento administrativo sancionador del Ministerio de Salud los actuados a fin de valorar las medidas reguladoras o sancionadoras convenientes.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR de oficio la prescripción de la facultad sancionadora de la Dirección de Fiscalización y Sanción - DFIS, para determinar la existencia de infracciones e imponer sanciones a la administrada **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO** identificada con **RUC N° 10271510352**, disponiéndose el archivo definitivo del **Expediente N°52865-2018-PAS**.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución Directoral al administrado **RODRIGUEZ ABANTO LUIS ALBERTO**, identificado con **RUC N° 10271510352**, en su dirección ubicado en calle Las Palmeras s/n Distrito de Cascas, provincia de Gran Chinú, departamento de la Libertad, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR lo actuado a la atención de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Ministerio de Salud, a fin de valorar las acciones necesarias, para el deslinde de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar por la inacción en la atención del **Expediente N°52865-2018-PAS**, que ha decidido la prescripción de la facultad de la Administración, para determinar la existencia de infracciones por parte de la Dirección de Fiscalización y Sanción.

Regístrese y comuníquese

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria
DIGESA

ROLAND ALEX IPARRAGUIRRE VARGAS
Director Ejecutivo
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN